

EL CONGRESO NACIONAL
En Nombre de la República

LEY ORGANICA SOBRE DERECHOS DE PARTICIPACION CIUDADANA Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL

CONSIDERANDO PRIMERO: Que el artículo 2 de la Constitución de la República declara que “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes, los cuales ejerce por medio de sus representantes o en forma directa”;

CONSIDERANDO SEGUNDO: Que en un Estado Social y Democrático de Derecho la vinculación activa y permanente entre gobierno y sociedad es fundamental para el correcto funcionamiento de la nación y para lograr una dinámica productiva en que los distintos actores de la sociedad asuman con responsabilidad sus respectivos roles;

CONSIDERANDO TERCERO: Que la inclusión de derechos de participación ciudadana y mecanismos de control social en las Constituciones de los sistemas político-democráticos, es reconocida internacionalmente como un medio de consagración y fortalecimiento de una estructura organizativa del Estado que lo legitima y afianza como la institución representativa por excelencia de la colectividad;

CONSIDERANDO CUARTO: Que la participación y los mecanismos de control ciudadanos son instrumentos de gestión que contribuyen al fortalecimiento de la democracia, ampliando los espacios para que la ciudadanía contribuya en el diseño, ejecución, control y evaluación de las políticas públicas, permitiendo plasmar en acciones concretas y concatenadas las necesidades de la sociedad y los lineamientos de las políticas estatales;

CONSIDERANDO QUINTO: Que mediante una participación ciudadana activa y responsable se logra un mayor sentido de pertenencia e identificación nacional por parte de la población respecto de las instituciones que la representan, cerrando la brecha entre representantes y representados y disminuyendo así la desconfianza e indiferencia de la población hacia la administración pública y el accionar de los poderes constituidos;

CONSIDERANDO SEXTO: Que la Constitución de la República integra a través de todo su articulado una serie de instrumentos de participación ciudadana que buscan fortalecer el ejercicio de la democracia y establece en su artículo 22 como derechos de la ciudadanía y control los siguientes: “1) Elegir y ser elegibles para los cargos que establece la presente Constitución; 2) Decidir sobre los asuntos que se les propongan mediante referendo; 3) Ejercer el derecho de iniciativa popular, legislativa y municipal, en las condiciones fijadas por esta Constitución y las leyes; 4) Formular peticiones a los poderes públicos para

solicitar medidas de interés público y obtener respuesta de las autoridades en el término establecido por las leyes que se dicten al respecto; 5) Denunciar las faltas cometidas por los funcionarios públicos en el desempeño de sus cargos.”;

CONSIDERANDO SÉPTIMO: Que estos derechos de participación y control ciudadanos no pueden ni deben ser limitados, pudiendo incorporarse y reconocerse otros distintos de los taxativamente configurados en el texto constitucional y esta ley;

CONSIDERANDO OCTAVO: Que, además, estos derechos de participación son reconocidos por diversos tratados y convenios internacionales de los que República Dominicana es signataria y se integran por tanto dentro del bloque de constitucionalidad de la nación;

CONSIDERANDO NOVENO: Que se requiere de un marco legal que concentre de manera ordenada y clara todos estos derechos y mecanismos, haciéndolos de fácil entendimiento y manejo por parte de la población, para garantizar su correcto ejercicio;

VISTA: La Constitución de la República;

VISTA: La Declaración Universal de Derechos Humanos, del 10 de diciembre del año 1948;

VISTO: El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del 23 de marzo del año 1976, ratificado mediante la Resolución 684, de fecha 27 de octubre de 1977;

VISTA: La Convención Interamericana de Derechos Humanos, del 22 de noviembre del año 1969, ratificada mediante Resolución No.739 del 25 de diciembre del año 1977;

VISTA: La Carta Iberoamericana de la Función Pública, del 27 de junio del año 2003;

VISTA: La Ley Electoral No. 275-97, del 21 de diciembre del año 1997, y sus reglamentos de aplicación;

VISTA: La Ley General de Libre Acceso a la Información Pública No. 200-04, del 28 de julio del año 2004;

VISTA: La Ley que crea la Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo No. 496-06, del 28 de diciembre del año 2006;

VISTA: La Ley del Distrito Nacional y los Municipios No. 176-07, del 17 de julio del año 2007;

VISTA: La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales No. 137-11, del 13 de junio del año 2011;

VISTA: La Ley de Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo, del 24 de julio del año 2013;

VISTO: El Decreto No. 39-03, del 16 de enero del año 2003, que crea las Comisiones de Auditoría Social y su instructivo de aplicación;

VISTO: El Reglamento para la Observación Electoral dictado por la Junta Central Electoral, del 8 de enero del año 2010;

VISTO: El Reglamento del Senado de la República, del 12 de agosto del año 2010;

HA DADO LA SIGUIENTE LEY

TITULO I

DISPOSICIONES INICIALES

CAPÍTULO I

DEL OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y SUJETOS DE PARTICIPACIÓN

Artículo 1.- Objeto.- Esta ley tiene por objeto regular y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de participación ciudadana y los mecanismos de control social establecidos por la Constitución de la República.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación.- Las disposiciones contenidas en esta ley se aplican en las diferentes instancias públicas y sociales, en los distintos niveles territoriales y en todas aquellas instituciones en donde el estado participe, utilizando los recursos, vías, procedimientos, y modalidades determinados por esta ley.

Párrafo.- Estas disposiciones son de orden público, de interés social y de observancia general y rigen en todo el territorio nacional y en los distintos ámbitos de la función pública.

Artículo 3.- Sujetos de la participación.- A los fines de esta ley, son sujetos de los derechos de participación ciudadana y mecanismos de control social los siguientes:

- 1) Sector cívico. Compuesto por organizaciones sociales territoriales y sectoriales, iglesias, universidades u otras entidades de carácter general, así como los ciudadanos en sentido particular;
- 2) Sector político. Compuesto por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado, los órganos constitucionales, las instituciones públicas del Gobierno Central, instituciones descentralizadas y autónomas, ayuntamientos y los partidos políticos.

CAPITULO II

DE LOS PRINCIPIOS Y DEFINICIONES

Artículo 4.- Principios.- Los principios generales que fundamentan esta ley son:

- 1) Complementariedad. La participación ciudadana directa es complementaria a las funciones de representatividad política, con el propósito de profundizar el uso de los mecanismos directos de participación;
- 2) Concertación. Objetivo fundamental de la planeación y que permite articular las decisiones de los distintos sectores de la sociedad de acuerdo a prioridades coordinadas en la definición, ejecución y evaluación de las políticas públicas;
- 3) Cooperación. Se reconoce la cooperación como la práctica indispensable la integración de los distintos actores sociales y políticos;
- 4) Corresponsabilidad. El Estado y toda su estructura comparten responsabilidades en la gestión eficiente y efectiva de la administración pública;
- 5) Igualdad. Garantiza a los ciudadanos, en forma individual y colectiva, los mismos derechos, condiciones y oportunidades de participación, incidencia y decisión, sin discriminación ni exclusión;
- 6) Información. La información de las actividades de la administración pública y las entidades de participación ciudadana deben ser permanentes y accesibles para todo el que la requiera;
- 7) Inclusión. Los mecanismos, y procedimientos regulados en esta ley no son limitativos, y no restringen el desarrollo y ejercicio de otras formas de participación en la vida política, económica y social de la nación, así como formas de promoción de los derechos de participación;
- 8) Pluralidad. Se reconoce el pluralismo, entendido como la diversidad de personas y pensamientos, como una riqueza y valor social al servicio del bien común. Se procurará siempre la inclusión de la mayor diversidad de intereses y opiniones que permitan enriquecer los procesos de participación;
- 9) Soberanía Popular. La soberanía popular legitima el poder público y sus actos, conforme lo dispone la Constitución.
- 10) Solidaridad. Es la capacidad de ordenar, articular y equilibrar, en función del bien común, los intereses de los distintos sectores, resguardando los intereses de las partes más vulnerables con el fin de superar la exclusión y las inequidades;
- 11) Transparencia. Las actividades desarrolladas en el marco de esta ley son siempre de pleno acceso al conocimiento de la ciudadanía en general;

12) Vinculación. Es importante que las acciones y decisiones tomadas en el ejercicio de los derechos de participación ciudadana y mecanismos de control social tengan un carácter vinculante para las autoridades, pasando de ejercicios de participación meramente consultivos a una participación efectiva;

13) Voluntariedad. La participación ciudadana debe de ser una decisión inherente a la voluntad del ciudadano, que nace de un deseo libre y consciente de participar en la vida de la nación.

Artículo 5.- Definiciones.- Para los fines de esta ley y su aplicación, se asumen los siguientes conceptos:

1) Administración pública: Conjunto de órganos, actividades o funciones que tienen por objeto el cumplimiento del interés público de la colectividad.

2) Agenda Legislativa: Es un instrumento de planificación del Congreso que integra todos los asuntos que son tomados en consideración por las cámaras legislativas.

3) Agenda Legislativa Priorizada: Es una herramienta de consenso y tramitación abreviada y preferencial de un número determinado de proyectos o iniciativas en una u otra cámara legislativa.

4) Autoridad Electoral: La máxima autoridad electoral de naturaleza administrativa la representa la Junta Central Electoral (JCE) o las Juntas Municipales a nivel local.

5) Cabildo abierto: Es un instrumento de participación directa de los munícipes de una determinada demarcación territorial, quienes participan en las reuniones del Consejo Municipal, para debatir asuntos de interés para la comunidad.

6) Cámara de Diputados: Es la cámara legislativa que ostenta la representación popular de los ciudadanos.

7) Cámara Legislativa: Es el órgano del Poder Legislativo que integra a los representantes del Senado o de la Cámara de Diputados.

8) Ciudadano: Persona miembro de un Estado que es sujeto de derechos civiles y políticos y obligaciones. Se extiende el concepto también para empresas, asociaciones y otras personas morales.

9) Ciudadano con derecho electoral: Son las personas habilitadas para el ejercicio de los derechos políticos y que además, se encuentran inscritos en el Padrón Electoral.

10) Comisión Coordinadora: Órgano político de las Cámaras legislativas, integrado por el Bufete Directivo y el vocero de cada bloque partidario representado.

11) Comisión Legislativa: Grupo de trabajo integrado por legisladores con la finalidad de estudiar y decidir respecto a los asuntos que les han sido encomendados por el Pleno o la presidencia. Las comisiones pueden ser ordinarias, extraordinarias, especiales, y de cortesía o protocolo.

12) Comisión Proponente: Son los que ostentan la representación los ciudadanos adherentes a una determinada iniciativa legislativa popular.

13) Constitución: Ley Suprema de la Nación.

14) Consulta popular: Instrumento de participación directa utilizado para conocer la opinión de la ciudadanía sobre cuestiones políticas de especial importancia e interés general para la vida estatal.

15) Debate Parlamentario: Proceso de discusión, que se lleva a cabo en el seno de las cámaras legislativas o de la Asamblea Nacional, entre los legisladores cuando fundamentan sus puntos de vista sobre los asuntos que son sometidos a su consideración.

16) Denuncia: Es el deber ciudadano que se concreta en el acto de poner en conocimiento de las autoridades aquellos hechos o conductas con los que una institución o funcionario público puedan estar incurriendo en una conducta irregular.

17) Derecho de participación ciudadana: Derecho de intervención individual o colectiva que tiene la ciudadanía en los asuntos públicos y sociales, con la finalidad de influir en la formulación y toma de decisiones gubernamentales.

18) Derecho de petición: Derecho de los ciudadanos de presentar ante los órganos y autoridades pública, peticiones sobre asuntos de su interés particular o colectivo.

19) Informe: Documento escrito en donde una comisión refleja los trabajos y resultados de las encomiendas que le han sido asignadas.

20) Iniciativa Legislativa: Es el acto por el cual determinados órganos del Estado, someten a la consideración del Congreso un proyecto de ley.

21) Iniciativa a Legislativa Popular: Es el impulso legislativo por ante las cámaras del Congreso nacional de por lo menos el dos por ciento de los ciudadanos habilitados en el Registro Electoral.

22) Iniciativa Popular (Legislativa y Municipal): Es el instrumento constitucional que permite que los ciudadanos habilitados en el registro electoral impulsen ante las autoridades y órganos correspondientes, iniciativas normativas a nivel nacional o municipal.

23) Junta Central Electoral: La Junta Central Electoral es la máxima autoridad en materia de administración y organización de los procesos electorales.

24) Legisladores: Diputados o Senadores que crean las leyes, dependiendo de la Cámara a la que pertenezca.

25) Ley: Acto jurídico votado por el Poder Legislativo que contiene normas de cumplimiento obligatorio, después de cumplidas las formalidades constitucionales.

26) Mecanismos de control ciudadano: Son instrumentos establecidos para la intervención de los ciudadanos en las políticas de la administración pública como medio de participación y supervisión de la gestión pública.

27) Norma jurídica: Acto, ley, decreto, tratado, ordenanza o resolución emanados de las autoridades competentes.

28) Oficina de Acceso a la Información (OAI): Es la instancia dentro de las oficinas gubernamentales que por mandato de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública Núm. 200-04 y el Decreto Núm. 130-05, canalizan las informaciones solicitadas por los ciudadanos.

29) Participación Ciudadana: Es el derecho que tienen los ciudadanos a formar parte de la vida social, política, económica y cultural de su comunidad, con la finalidad de influir en la formulación y toma de decisiones gubernamentales, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos.

30) Plebiscito: Consulta hecha por la autoridad competente o ciudadanía mediante la cual somete al voto popular directo para que apruebe o rechace una determinada propuesta relativa a la vida de la nación.

31) Pleno de las Cámaras: Es la máxima autoridad decisoria. La integra la totalidad de los congresistas en cada cámara, y se constituye válidamente con la mayoría absoluta de sus respectivos miembros.

32) Políticas públicas: Es el conjunto de programas, proyectos, decisiones y acciones asumidas por el Estado o por el gobierno frente a distintas situaciones de la vida nacional.

33) Poder Legislativo: Poder constitucional ejercido por el Congreso de la República, integrado por el Senado y la Cámara de Diputados.

34) Presupuesto participativo: Instrumento de participación que permite la intervención de los ciudadanos en la discusión, elaboración y seguimiento del presupuesto municipal.

35) Referendo: Consulta hecha por las autoridades mediante la cual los ciudadanos pueden pronunciarse, aprobando o revocando, respecto de temas normativos o de interés general que las autoridades sometan a su consideración o que la ciudadanía entienda pertinente.

36) Registro Nacional Electoral: Listado de personas que constituye la base para hacer efectivo el derecho político de los ciudadanos para ser electores y poder ser electos, entre otros derechos ciudadanos. Está bajo la responsabilidad de la Junta Central Electoral.

37) Rendición de cuentas: Es la acción, como deber legal y ético, que tiene todo funcionario o persona de responder e informar por la administración, el manejo y los rendimientos de fondos, bienes o recursos públicos asignados y los resultados en el cumplimiento del mandato que le ha sido conferido;

38) Senado: Una de las cámaras legislativas que integra el Congreso Nacional y cuyos funcionarios ostentan la representación territorial de los ciudadanos.

39) Sistema de Información Legislativa (SIL): Archivos dinámicos de información y acceso documental primaria y asociada a toda la agenda legislativa de las cámaras legislativas, sus fases dentro del proceso y los responsables de actuación en cada una de ellas.

40) Sociedad civil: Conjunto de ciudadanos organizados voluntariamente y que actúan en espacios públicos con objetivos y metas particulares y comunes en beneficio de la colectividad.

41) Sufragio: Es el proceso mediante el cual la ciudadanía ejerce su derecho a elegir a las personas que la representen en las funciones públicas y a decidir sobre asuntos de la vida estatal que son sometidos a su consideración.

42) Tomar en Consideración: Es un procedimiento de naturaleza legislativa que se verifica cuando la simple lectura de una iniciativa es considerada acorde a la Constitución y a los Reglamentos internos de las cámaras legislativas.

CAPÍTULO III
DE LOS MECANISMOS PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE PARTICIPACION
CIUDADANA

Artículo 6.- Mecanismos de participación ciudadana.- Se reconocen como mecanismos para el ejercicio de los derechos de participación ciudadana y control ciudadano los siguientes:

1) Mecanismos nacionales de democracia directa:

- a) Iniciativa Legislativa Popular;
- b) Referendo aprobatorio constitucional;
- c) Referendo ordinario;
- d) Plebiscito Nacional.

2) Mecanismos locales de participación y control:

- a) Iniciativa Normativa Municipal;
- b) Referendo Local;
- c) Plebiscito Local;
- d) Presupuesto Participativo;
- e) Cabildo Abierto.

3) Mecanismos de participación y control ciudadano:

- a) Acceso a la Información Pública;
- b) Vistas Públicas;
- c) Derecho de Petición;
- d) Consultas Populares;
- e) Observación Electoral;
- f) Veedurías Ciudadanas;
- g) Comisiones de Auditoría Social;
- h) Observatorios;
- i) Demanda en Rendición de Cuentas;
- j) Denuncia de Faltas.

Artículo 7.- Participación de los ciudadanos. La participación es el derecho que tienen los ciudadanos de formar parte e interactuar en la vida estatal en los ámbitos sociales, políticos, económicos y culturales, influyendo en la formulación, ejecución y supervisión de las decisiones de sus funcionarios.

Párrafo.- Los ciudadanos que hagan uso de los instrumentos de participación, podrán hacerlo con su sola presencia o comunicación escrita por ante los órganos, instancias o mecanismos de participación o de manera organizada, en grupos de ciudadanos, cumpliendo con los requerimientos establecidos en la Constitución y esta ley.

TITULO II
DE LOS MECANISMOS DE DEMOCRACIA DIRECTA
CAPÍTULO I
DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR
SECCIÓN I

DEL CONCEPTO, SUJETOS LEGITIMADOS, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y RESTRICCIONES

Artículo 8.- Iniciativa legislativa popular.- Se reconoce y garantiza a todos los ciudadanos el derecho de presentar iniciativas legislativas populares que les permitan tener una participación activa y directa en el ordenamiento jurídico del Estado, cumpliendo con las formalidades y requisitos establecidos por la Constitución y esta ley.

Artículo 9.- Concepto de ILP.- Las Iniciativas Legislativas Populares son instrumentos de participación política que pueden ser ejercidos en forma de proyectos de Leyes por ante el Congreso Nacional, a los fines de que se tomen en consideración e inicie el trámite interno, conforme a los procedimientos y plazos establecidos en la Constitución, esta ley y los reglamentos internos de las cámaras legislativas.

Artículo 10.- Sujetos legitimados.- Todos los ciudadanos debidamente inscritos y validados en el Registro Nacional Electoral, documento elaborado, actualizado y administrado por la Junta Central Electoral, conforme lo dispone la Constitución y su ley especial, están en calidad de tramitar una iniciativa legislativa popular.

Artículo 11.- Porcentaje ciudadanos electorales requeridos.- Al menos un dos por ciento de los inscritos en el Registro Nacional de Electores tienen que concurrir como adherentes para el depósito y trámite formal de una Iniciativa Legislativa Popular.

Artículo 12.- Ámbito Material de las ILP.- Las ILP pueden versar sobre cualquier materia de desarrollo por el legislador ordinario, a excepción de aquellas limitaciones expresamente citadas en la Constitución y la presente ley.

Artículo 13.- Restricciones.- Las Iniciativas legislativas populares no pueden regular las siguientes materias:

- 1) Reformas Constitucionales;
- 2) Normas Tributarias o Presupuestales;
- 3) Regímenes salariales;
- 4) Defensa Nacional;
- 5) Normas de Relaciones Internacionales;
- 6) Estructura y organización de los poderes públicos;
- 7) Régimen económico, monetario y financiero;
- 8) Asuntos de organización territorial.

Párrafo.- A través del ejercicio de la ILP se pueden realizar consultas populares vía referendo ordinario sobre temas no restringidos a este mecanismo.

Artículo 14.- No coincidencia con períodos electorales.- Las propuestas de Iniciativas Legislativas Populares no podrán coincidir con los períodos electorales.

SECCIÓN II DE LA COMISIÓN PROPONENTE DE LA ILP

Artículo 15.- Comisión proponente.- La Comisión Proponente es la encargada de representar a los ciudadanos que se adhieran a una determinada Iniciativa Legislativa Popular y los representan en los trámites pertinentes ante la Junta Central Electoral y el Congreso Nacional. Esta Comisión proponente designará entre sus miembros uno o varios expositores autorizados, a los fines procedentes.

Artículo 16.- Integración.- La Comisión proponente se integra por personas físicas o morales, quienes presentarán por cualquier medio que entiendan procedentes ante las secretarías de los órganos correspondientes sus credenciales que deben incluir:

- 1) Nombre o razón social;
- 2) Cédula de Identidad y Electoral;
- 3) Formal elección de domicilio común;
- 4) Correos electrónicos;

5) Cualquier otro medio de contacto e identificación que el Congreso

Nacional entienda; y

6) Firma o huellas dactilares.

Artículo 17.- Notificación.- Una vez integrada la Comisión Proponente, se le notifica al Congreso Nacional y a la Junta Central Electoral vía secretarías generales de dichos organismos, la intención de tramitar una Iniciativa Legislativa Popular conforme los parámetros constitucionales y legales establecidos.

Artículo 18.- Transparencia de gastos.- Los proponentes y sus representantes, al momento de promover la intención para presentar una Iniciativa Legislativa Popular, deben dejar constancia pública por cualquier medio del origen de los fondos que proyectan utilizar, el uso que se le dé a los mismos, así como transparentar las donaciones que se reciban para tales fines.

SECCIÓN III DE LA FASE PRE-LEGISLATIVA

Artículo 19.- Marco regulatorio. A los fines de elaborar la propuesta de iniciativa legislativa popular, la Comisión proponente, al momento de definir las viabilidades de la misma, elaborará un marco justificativo que precise la problemática a regular, los ámbitos personal, material y territorial del alcance de la norma, así como su posible impacto en términos de beneficios para la colectividad, entre otros aspectos.

Párrafo.- Este documento se acompañará del material de apoyo y justificativo de la problemática, así como los antecedentes necesarios para el desarrollo, estudio, debate y sanción de la iniciativa legislativa popular.

Artículo 20.- Elaboración del texto articulado. En adición a los documentos de soporte de las iniciativas legislativas populares, las mismas deben estar redactadas en un texto articulado y conforme la estructura que impone el Manual de Técnica Legislativa de las cámaras del Poder Legislativo.

Artículo 21.- Asesoría. El Congreso Nacional, a través de los órganos técnicos correspondientes, podría asesorar en el uso de las mejores prácticas en la redacción de las propuestas a ser presentadas, sujeto este apoyo a la disponibilidad en la agenda parlamentaria y conforme requerimiento de parte interesada.

Párrafo.- Todas las directrices, manuales, normas y procedimientos legislativos de los trámites internos en ambas cámaras, podrán ser requeridos al Congreso Nacional, por la Comisión Proponente.

SECCIÓN IV

DE LA DIFUSIÓN DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR, RECOLECCIÓN Y DE FIRMAS

Artículo 22.- Difusión de la Iniciativa Legislativa Popular. Las personas físicas o morales que se constituyan en Comisión Proponente harán un aviso público manifestando su intención de impulsar una Iniciativa Legislativa Popular, presentando un resumen del proyecto que piensan tramitar, incluyendo la documentación justificativa.

Párrafo.- La publicación debe presentar, mínimamente, la metodología a seguir, el proceso de recolección y validación de las firmas adheridas, así como el trámite interno y la defensa del proyecto ante las cámaras legislativas.

Artículo 23.- Contenido de los pliegos de firmas. Los pliegos contentivos de la recolección de firmas deben consignar, al menos, lo siguiente:

- 1) Nombre y apellidos del adherente;
- 2) Número de Cédula de Identidad y Electoral;
- 3) Razón social que eligen para domicilio común;
- 4) Provincia o circunscripción;
- 5) Firma legible;
- 6) Huellas digitales, en caso de no firmar.

Artículo 24.- Porcentaje firmas requerido. La Comisión Proponente, una vez que se alcance, al menos, el dos por ciento del Registro Nacional de Electores, remite a la Junta Central Electoral el texto de la propuesta de ley y los documentos justificativos de la misma conforme los parámetros constitucionales.

SECCION V

VALIDACION DE FIRMAS

Artículo 25.- Validación. La Junta Central Electoral. Una vez recibe el pliego de firmantes de la Iniciativa Legislativa Popular, procede al proceso de conteo nacional, autenticación y validación, conforme a los mecanismos de verificación o muestreos aleatorios que establezca el organismo electoral para tales fines.

Artículo 26.- Plazo de la Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral dispone de un plazo de hasta sesenta (60) días hábiles para validar el número de ciudadanos con derecho electoral adheridos a la Iniciativa Legislativa Popular.

Párrafo I.- De manera excepcional, la Junta Central Electoral puede extender hasta treinta (30) días hábiles más, este plazo inicial para validar las firmas adheridas.

Párrafo II.- Transcurridos los plazos legales para la autenticación por parte de la Junta Central Electoral y este organismo no concluyere con la validación del número de firmas necesarios, la Comisión Proponente dispone de las garantías procesales, establecidas en la Constitución y leyes especiales, para la protección de los derechos fundamentales cuando son vulnerados.

Artículo 27.- Prórroga.- En caso de que no se alcanzare el porcentaje de firmas requerido constitucionalmente, se le notificara a la Comisión Proponente una prórroga de hasta treinta (30) días calendario adicionales, para completar el número de firmas constitucionales requeridas.

Párrafo.- En caso de que transcurriese este tiempo y la Comisión Proponente no concluya con el depósito complementario de las firmas faltantes, se entenderá desestimada la intención de Iniciativa Legislativa Popular y deberá transcurrir un año a partir de esa fecha, para presentar nuevamente el mismo tema.

Artículo 28.- Certificado de validación. En caso de que se completase el número de firmantes, la Junta Central Electoral, una vez agotado el plazo para la validación de las firmas, dispone de diez (10) días hábiles para emitir en favor de la Comisión Proponente un certificado de obtención de las firmas adheridas, que replicará al Senado, la Cámara de Diputados y al Defensor del Pueblo.

Artículo 29.- Conclusión trabajo Junta Central Electoral. Concluido el proceso de validación de firmas, la Comisión Proponente procede a conformar un expediente completo para su tramitación por ante el Congreso Nacional, en una de las cámaras legislativas, los siguientes documentos:

- 1) Validación del Marco Regulatorio;
- 2) Proyecto de Iniciativa Legislativa Popular;
- 3) Pliegos de firmas adherentes;
- 4) Verificación y Validación por parte de la Junta Central Electoral;
- 5) Comisión Proponente y sus calidades de representación.

Artículo 30.- Mecanismos de garantías. En caso de que la inadmisibilidad de la Junta Central Electoral se configure como una vulneración a derechos fundamentales, la Comisión Proponente podría ejercer los mecanismos de garantías y tutela ante el Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo.

SECCIÓN VI DEL TRÁMITE LEGISLATIVO

Artículo 31.- Depósito ante la Cámara Legislativa. La Iniciativa Legislativa Popular, la documentación de soporte justificativo y la validación del pliego de adherentes se depositan en la secretaría General legislativa correspondiente, en formatos físico y digital.

Artículo 32.- Plazo perentorio. La Comisión Proponente dispone de hasta treinta (30) días hábiles a partir del Certificado de Adherentes emitido por la Junta Central Electoral, para depositar la Iniciativa ante la Cámara correspondiente.

Párrafo.- Si transcurriese ese plazo sin el depósito formal, se entenderá desestimada la intención validada por la Junta Central Electoral para fines de presentación de esa Iniciativa Legislativa Popular.

Artículo 33.- Registro en el Sistema de Información Legislativa (SIL). Una vez depositada, la Iniciativa Legislativa Popular se registra con un número único y se publica en el portal institucional como iniciativa depositada y los nombres de la Comisión Proponente, como autores de la misma.

Artículo 34.- Remisión a la Comisión Coordinadora. La Secretaría General Legislativa la remitirá a la Comisión Coordinadora, en la primera reunión que se celebre, luego del depósito de la misma.

Artículo 35.- Plazo para tomar en consideración.- La Comisión Coordinadora dispone un plazo de hasta quince (15) días hábiles para tomarla o no en consideración, tomando como parámetros los establecidos en los Reglamentos Internos.

Artículo 36.- Causas de inadmisibilidad. Las principales causas de inadmisibilidad de una Iniciativa Legislativa Popular son aspectos de inconstitucionalidad o que se pretenda regular materias restringidas.

Artículo 37.- Admisibilidad automática al trámite legislativo.- En caso de que transcurriesen los quince (15) días habilitados para la toma en consideración por parte de la Comisión Coordinadora y sin que esto se haya producido se entenderá como admitida a trámite dicha proposición, debiendo seguir el procedimiento parlamentario correspondiente.

Párrafo I.- Cualquier decisión que adopte la Comisión Coordinadora de la cámara correspondiente será comunicada a los proponentes, a la Junta Central Electoral y a la otra cámara legislativa para los fines subsiguientes.

Párrafo II.- La Comisión Proponente o sus representantes, una vez notificados de la inadmisibilidad justificada de la propuesta de ILP, dispone de hasta seis (6) meses para readecuar el texto, y recolectar y validar las firmas requeridas constitucionalmente.

Artículo 38.- Inicio del trámite. La Comisión Coordinadora, una vez haya tomado en consideración la Iniciativa Legislativa, remite la documentación completa y certificada a la secretaría general legislativa, disponiendo el apoderamiento a la Comisión competente o a una Especial, y lo informa al pleno en la sesión siguiente, para fines publicidad.

Párrafo.- La Comisión Proponente podrá retirar el proyecto en cualquier momento antes de ser sometido a votación.

SECCIÓN VII FASE DE DISCUSIÓN, CONSENSO Y DECISIÓN DE LA ILP

Artículo 39.- Remisión a comisión de estudio. La Comisión correspondiente, una vez apoderada, agenda preferentemente la propuesta de ILP y establece los mecanismos de consulta a utilizar, conforme los y procedimientos constitucionales y reglamentarios que apliquen.

Artículo 40.- Defensa de la ILP. Los miembros de la Comisión Proponente debidamente acreditados podrán ser invitados con anticipación a las reuniones y a cuantos mecanismos de consulta utilice la comisión correspondiente.

Artículo 41.- Preferencia Comisión Bicameral. Los proyectos de Iniciativa Legislativa Popular serán conocidos por la comisión correspondiente de las cámaras legislativas, de manera preferente en comisión bicameral.

Párrafo.- Las condiciones, plazos y efectos de esta Comisión Bicameral, se regirán por los reglamentos internos de las cámaras legislativas.

Artículo 42.- Vistas públicas. Sin menoscabo de cualquier instancia de consulta, contacto o investigación que adopten las comisiones o comisión a cargo, es recomendable ventilar las Iniciativas Legislativas Populares en Vistas Públicas nacionales o provinciales, según se amerite.

Artículo 43.- Reglas comunes a las Comisiones. En lo adelante, todo el procedimiento queda sujeto a las reglas ordinarias, especiales o abreviadas del trámite legislativo interno en cada una de las cámaras.

Artículo 44.- Informe legislativo. Una vez concluida la fase de estudio, deliberación e informe en la Comisión encargada, bien sea ordinaria, especial o bicameral, pasará al Pleno el Informe correspondiente para su conocimiento y sanción, conjuntamente con el texto originario depositado.

Párrafo.- Los informes pueden sugerir modificaciones, adiciones, supresión o textos alternativos, conforme los procedimientos ordinarios, sin que se desnaturalice la propuesta admitida a trámite.

Artículo 45.- Conclusión trámite. Aprobadas por las cámaras legislativas, esta ley del Congreso se remite al Poder Ejecutivo para los fines constitucionales.

CAPÍTULO II DEL REFERENDO APROBATORIO CONSTITUCIONAL

Artículo 46.- Definición. El Referendo Aprobatorio Constitucional es un mecanismo de democracia directa que permite a los ciudadanos decidir si entran o no en vigencia modificaciones constitucionales, previamente aprobadas por la Asamblea Nacional Revisora.

Artículo 47.- Materias objeto de referendo constitucional. El Referendo Aprobatorio Constitucional sólo es convocado cuando la reforma constitucional verse sobre las siguientes materias:

- 1) Derechos, deberes y garantías fundamentales;
- 2) Ordenamiento territorial y municipal;
- 3) Régimen de nacionalidad, ciudadanía y extranjería;
- 4) Régimen monetario;
- 5) Procedimientos de reforma constitucional.

Párrafo.- Las reformas constitucionales que no versen sobre los aspectos señalados en este artículo, deben esperar la decisión del Referendo Aprobatorio Constitucional de aquellas reformas que si lo requieran para que la Asamblea Nacional proceda a la proclamación del nuevo texto constitucional modificado.

Artículo 48.- Plazos de remisión. La Comisión Coordinadora de la Asamblea Nacional Revisora remitirá a la Junta Central Electoral el pliego contentivo de la (s) modificación (es) constitucional (es) en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles, luego de la suspensión de los trabajos reformativos de la Asamblea Nacional Revisora.

Artículo 49.- Firmas. El pliego de modificación constitucional debe ser firmado por los integrantes del de la Comisión Coordinadora y remitido a la Junta Central Electoral por el presidente de la Asamblea Nacional Revisora.

Artículo 50.- Convocatoria. Una vez recibido el pliego de modificación, la Junta Central Electoral convocará el Referendo Aprobatorio Constitucional dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha de recepción.

Artículo 51.- Votos requeridos. La aprobación de las reformas a la Constitución por vía de referendo requiere de más de la mitad de los votos de los sufragantes y que el número de éstos exceda del treinta por ciento (30%) del total de ciudadanos inscritos en el Registro Electoral, sumados los votantes que se expresen por “SÍ” o por “NO”.

Artículo 52.- Plazo para resultados. Luego de celebrado el Referendo Aprobatorio Constitucional, la Junta Central Electoral cuenta con un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, para emitir los resultados correspondientes.

Artículo 53- Remisión de actas. La Junta Central Electoral dispone de hasta cinco (5) días hábiles para remitir las actas correspondientes a la Asamblea Nacional Revisora.

Artículo 54.- Revisión y aprobación de actas. Una vez recibidas las actas correspondientes, la Asamblea Nacional Revisora reanuda los trabajos y procede a la revisión de las mismas, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su recepción.

Artículo 55.- Votación individual del articulado. Los artículos sometidos a referendo aprobatorio, conforme al procedimiento establecido en la Constitución deben ser aprobados o rechazados de manera individual.

Párrafo.- En caso de que un artículo sea rechazado por la vía del referendo aprobatorio constitucional, se mantiene dicho texto con la redacción original de la Constitución que está siendo reformada.

Artículo 56.- Proclamación. La reforma constitucional será proclamada y publicada íntegramente con los textos reformados por la Asamblea Nacional Revisora.

CAPÍTULO III DEL REFERENDO ORDINARIO

Artículo 57.- Referendo Ordinario. El Referendo Ordinario es una institución democrática a través de la cual las autoridades someten a la consideración de la ciudadanía, para su ratificación o rechazo, temas normativos de carácter nacional.

Artículo 58.- Iniciativa. Le corresponde la iniciativa para presentar proyectos de ley que convoquen a Referendo Ordinario:

- 1) El Presidente de la República;
- 2) Los senadores y diputados, con la adhesión de un tercio de la matrícula de una u otra cámara;
- 3) La Suprema Corte de Justicia en asuntos judiciales;
- 4) La Junta Central Electoral en asuntos electorales;
- 5) Los ciudadanos en general cuando su número supere el dos por ciento (2%) del electorado nacional.

Párrafo I.- El proyecto de ley que convoque a Referendo Ordinario debe especificar claramente su finalidad y los aspectos que se someterán a votación.

Párrafo II.- Cuando el referendo ordinario sea impulsado por los ciudadanos, se seguirá el procedimiento establecido para la Iniciativa Legislativa Popular.

Artículo 59.- Restricción. El Referendo Ordinario no podrá tratar sobre aprobación ni revocación de mandato de autoridad electa o designada y otras limitaciones establecidas en la Constitución.

Artículo 60.- Ley de convocatoria. La convocatoria a Referendo Ordinario debe hacerse mediante una ley de convocatoria que debe contar con la siguiente estructura:

- 1) Proponente (s);
- 2) Tema o problemática a consultar;
- 3) Fundamento constitucional;
- 4) Mandato a la JCE para la celebración de la consulta;
- 5) Plazos.

Artículo 61.- Aprobación ley de convocatoria. La aprobación de la ley de convocatoria a Referendo Ordinario debe contar con el voto de las dos terceras partes (2/3) de los presentes en cada cámara y sigue los procedimientos constitucionales correspondientes.

Artículo 62.- No coincidencia con elecciones. La celebración del Referendo Ordinario no podrá coincidir con las elecciones de autoridades, sean ordinarias o extraordinarias.

Artículo 63.- Plazo de convocatoria para el referendo ordinario. Una vez recibida la ley de convocatoria, la Junta Central Electoral convoca a consulta popular por la vía del referendo ordinario, a más tardar setenta (70) días después de la publicación de la misma.

Artículo 64.- Resultados. La aprobación o rechazo de la consulta popular por la vía del Referendo Ordinario requiere más de la mitad de los votos de los sufragantes, a favor o en contra.

Artículo 65.- Plazo de emisión de resultados. Una vez celebrado el Referendo Ordinario, la Junta Central electoral cuenta con un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles para validar los resultados correspondientes.

Artículo 66.- Remisión de resultados al Congreso. Una vez vencido el plazo de validación, la JCE dispone de hasta cinco (5) días hábiles para remitir al congreso Nacional las actas correspondientes.

Artículo 67.- Revisión de actas. Una vez recibidas las actas de la consulta hecha por Referendo Ordinario, el Congreso Nacional en reunión conjunta de sus cámaras, procede a su revisión y aprobación.

Artículo 68.- Vinculación. La decisión del Referendo ordinario es vinculante a todos los poderes del Estado debiendo seguir para su entrada en vigencia los procedimientos y plazos establecidos en la constitución.

Artículo 69.- Referendo Ordinario rechazado. Si la cuestión sometida a consideración por la vía del Referendo Decisorio Ordinario fuera rechazada, el asunto será desestimado.

CAPÍTULO IV DEL PLEBISCITO NACIONAL

Artículo 70.- Celebración. El plebiscito es un mecanismo de participación del ejercicio democrático directo celebrado en el ámbito nacional o local, a través del cual el pueblo se pronuncia de manera afirmativa o negativa sobre temas políticos o administrativos considerados de importancia fundamental para el país o la comunidad, previo a la toma de la decisión.

Artículo 71.- Requisito. Para la convocatoria a Plebiscito Nacional se requiere la aprobación de una ley de convocatoria al plebiscito, aprobada con el voto favorable de más de la mitad de los miembros presentes en cada cámara.

Artículo 72.- Iniciativa. Tienen iniciativa para solicitar la celebración de plebiscitos nacionales:

- 1) El Presidente de la República;
- 2) Los senadores y diputados, con la adhesión de un tercio (1/3) de la matrícula de una u otra cámara;
- 3) La Suprema Corte de Justicia en asuntos judiciales;
- 4) La Junta Central Electoral en asuntos electorales.

Artículo 73.- Plazo de convocatoria. Para la celebración del Plebiscito Nacional, las asambleas electorales se reunirán a más tardar setenta (70) días después de la publicación de la ley de convocatoria.

Artículo 74.- Aprobación. La aprobación o no del Plebiscito Nacional requerirá más de la mitad de los votos de los sufragantes.

Artículo 75.- Plazo de emisión de resultados. Luego de celebrado el Plebiscito Nacional, la Junta Central Electoral cuenta con un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, a partir de terminado el conteo de los votos, para emitir los resultados correspondientes.

Artículo 76.- Comunicación al Congreso. Luego de emitidos los resultados, la Junta Central Electoral cuenta con hasta cinco (5) días hábiles después de la emisión de resultados para remitir al congreso Nacional las actas correspondientes.

Artículo 77.- Revisión de actas. Una vez recibidas las actas de la consulta hecha mediante Plebiscito Nacional, el Congreso Nacional en reunión conjunta de sus cámaras, procede a su revisión y aprobación.

Artículo 78.- Remisión de texto y actas. En caso de que la cuestión sometida a Plebiscito Nacional haya sido aprobada, el Congreso Nacional remite al Presidente de la República el texto aprobado, conjuntamente con las actas revisadas, para su promulgación y publicación de la ley o acto en cuestión dentro de los quince (15) días hábiles establecidos por la ley.

Artículo 79.- Vigencia. La decisión del Plebiscito Nacional surte efecto y entra en vigencia luego de que sean examinadas las actas por el Congreso Nacional y publicadas por el Presidente de la República.

Artículo 80.- Fuerza vinculante. Los efectos de la consulta plebiscitaria son vinculantes y en todos los casos, la decisión popular es obligatoria, sea para el gobierno central, los poderes y órganos constitucionales, o los gobiernos locales.

CAPÍTULO V

DEL PROCEDIMIENTO COMÚN DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL PARA REFERENDO APROBATORIO CONSTITUCIONAL, REFERENDO ORDINARIO Y PLEBISCITOS NACIONALES

Artículo 81.- Contenido de la convocatoria. La convocatoria hecha por la Junta Central Electoral para la celebración de plebiscitos o referendos debe contener, por lo menos:

- 1) Modalidad del procedimiento: Referendo Decisorio Ordinario o Plebiscito Nacional;
- 2) Disposiciones constitucionales o legislativas en virtud de las cuales deba verificarse y sustentan la decisión;
- 3) Extensión territorial que abarca la decisión;
- 4) Fecha, hora y lugares de la votación;
- 5) Especificación precisa de la ley o tema correspondiente sometido a consideración;
- 6) La/s pregunta/s que se efectuará/n, procurando que las mismas tengan la mayor claridad posible para el entendimiento de los votantes;
- 7) El porcentaje de votos mínimos requeridos para la validez de la consulta, así como el porcentaje de votos requeridos para su aprobación;
- 8) Cualquier otra disposición que asegure una eficiente organización, participación y transparencia del proceso.

Artículo 82.- Medios de difusión. Para el caso de los referendos y plebiscitos nacionales, sólo la Junta Central Electoral podrá desarrollar campañas de promoción de estos mecanismos de democracia directa.

Artículo 83.- Prohibición. Se prohíbe a los funcionarios de los poderes del Estado y los entes e instituciones centralizadas, descentralizadas o autónomas, y a los gobiernos locales, la utilización de recursos humanos y materiales de los presupuestos de las instituciones para efectuar campañas de promoción de referendos y plebiscitos nacionales.

Artículo 84.- Sanción. La violación al mandato establecido en el artículo 83, conlleva una sanción de entre 10 y 30 salarios mínimos del sector público para el funcionario que cometiere la falta.

TITULO III
DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACION Y CONTROL CIUDADANO
CAPÍTULO I
DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Artículo 85.- Acceso a la información pública. Se reconoce y garantiza a todos los ciudadanos el derecho de libre acceso a la información pública, pudiendo solicitarla y recibirla de cualquier órgano del Estado, centralizado o descentralizado, y de aquellas entidades en que el Estado tenga participación, y se regirá por la legislación vigente en la materia.

CAPÍTULO II
DE LAS VISTAS PÚBLICAS

Artículo 86.- Vistas públicas. Se establecen las vistas públicas como un mecanismo de participación ciudadana, en que las cámaras legislativas, los entes y órganos gubernamentales y los gobiernos locales, someten a la consideración de los ciudadanos un asunto de interés general, escuchando y valorando las opiniones emitidas, fortaleciendo la democracia participativa en que se fundamenta el Estado dominicano.

Artículo 85.- Derecho de participación. Todo ciudadano, de manera individual u organizada, tiene derecho de participar y ser escuchado en las vistas públicas.

Párrafo I.- Los ciudadanos y organizaciones civiles podrán solicitar a las instancias correspondientes la celebración de vistas públicas para la discusión de asuntos de su interés.

Párrafo II.- La solicitud que realicen los ciudadanos o las organizaciones civiles, no obliga a las entidades correspondientes a la celebración de las mismas.

Artículo 87.- Organización. Las vistas públicas serán organizadas por los órganos correspondientes de las cámaras legislativas del Congreso Nacional, bien sean permanentes, especiales, bicamerales o de investigación, o por los entes y órganos gubernamentales y los gobiernos locales que decidan hacer uso de ellas.

Artículo 88.- Ámbito y convocatoria. Las vistas públicas pueden ser celebradas en el ámbito nacional, regional, provincial o municipal, y deben ser convocadas y difundidas por cualquier medio masivo de información u otras modalidades que las autoridades

entiendan pertinentes, con por lo menos tres (3) días hábiles de antelación a la celebración de la misma.

Párrafo.- La convocatoria a vistas públicas establecida en este artículo debe ser publicada en el portal electrónico de la institución u órgano convocante.

Artículo 89.- Informe y publicidad. La autoridad competente debe preparar un informe en el que consten las incidencias de la vista pública celebrada, el cual debe incluir las instituciones, personas que participaron, sus opiniones y la decisión del órgano convocante respecto de las mismas, justificando y argumentando su decisión.

Párrafo.- Dicho informe deberá ser publicado en el portal electrónico del órgano o institución convocante y puesto a disposición de todo el que lo requiera.

Artículo 90.- Trámite y ejecución. Todo lo concerniente al trámite y ejecución de las vistas públicas dentro de las cámaras legislativas, o de los entes y órganos gubernamentales, será regulado por el reglamento particulares sujetos a los lineamientos de la presente ley.

CAPÍTULO III DEL DERECHO DE PETICIÓN

Artículo 91.- Derecho de Petición. El derecho de petición es la facultad que tienen los ciudadanos de solicitar ante las autoridades públicas, individual o de forma colectiva, medidas de interés público comprendidas en el ámbito de sus competencias, y obtener respuesta respecto a su pretensión.

Párrafo.- Las autoridades competentes deben dar respuestas o contestaciones debidamente motivadas a los peticionarios sobre las medidas solicitadas, basando su decisión en disposiciones constitucionales y legales.

Artículo 92.- Objeto de las peticiones. Las peticiones podrán versar sobre cualquier asunto o materia comprendida en el ámbito de competencia del destinatario, con independencia de que afecten exclusivamente al peticionario o sea de interés colectivo o general.

Artículo 93.- Ejercicio. El derecho de petición podrá ejercerse ante todos los poderes públicos, entidades, autoridades centralizadas, autónomas y gobiernos locales, así como ante instituciones en que el Estado tenga participación.

Artículo 94.- Formulación. El derecho de petición debe ser formulado por escrito, sea por comunicación directa o por vía electrónica, que permita dejar constancia del mismo y acreditar la autenticidad del peticionario.

Artículo 95.- Requisitos. La petición debe cumplir con los siguientes requisitos:

- 1) Nombre/s y apellidos del o los solicitante/s con su/s número/s de cédula de identidad y electoral, teléfonos u otros medios de comunicación;
- 2) Nombre e identificación del organismo, si se trata de una persona jurídica;
- 3) Funcionario o institución a la que se dirige;
- 4) Detalle pormenorizado del objeto de la petición;
- 5) Motivación de la petición;
- 6) Relación de documentos que acompañan la petición, si los hubiere;
- 7) Firma/s del o los solicitante/s;
- 8) Lugar o medio para las notificaciones de lugar.

Artículo 96.- Recibo. La petición debe ser depositada o remitida de forma electrónica por ante la instancia correspondiente del poder público, entidad, autoridad centralizada, autónoma o gobierno local que corresponda.

Párrafo.- Podrá requerirse al peticionario, dejado constancia de ello, que aporte datos o documentos complementarios que puedan ayudar al trámite de la petición. Con este requerimiento se interrumpirá el plazo establecido para la resolución de la petición.

Artículo 97.- Competencia. La entidad correspondiente tiene un plazo de hasta tres (3) días hábiles para determinar su competencia respecto de la petición realizada.

Párrafo.- En caso de que el destinatario no sea competente para resolver sobre una petición, lo comunica al peticionario dejando constancia de su decisión y declaratoria de incompetencia. Siempre que sea posible, deberá indicarse la entidad idónea a la que debe dirigirse la petición.

Artículo 98.- Plazo. La autoridad correspondiente tiene un plazo máximo de quince (15) días hábiles para contestar la petición, luego de recibida, pudiendo extenderse este plazo de manera excepcional y previa justificación, por diez (10) días hábiles más.

Artículo 99.- Vías recursivas.- En caso de no obtenerse respuesta en el plazo establecido para la contestación de la petición en el artículo 96 de esta ley, el peticionario podrá ejercer las vías recursivas establecidas en la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública No. 200-04.

CAPÍTULO IV DE LAS CONSULTAS POPULARES

Artículo 100.- Consultas populares. Las consultas populares son instrumentos que promueven la participación, a través de las cuales los poderes públicos, entes y órganos del Estado consultan a comunidades y actores sociales sobre asuntos considerados de importancia y de interés general, a los fines de realizar ejecutorias provistas de una mayor certidumbre, concertación y garantía de eficiencia y eficacia.

Artículo 101.- Realización de consulta. La consulta popular la realiza el poder público, entidad u órgano correspondiente, sea por iniciativa propia o a petición de la comunidad o grupos interesados.

Párrafo.- Cuando la realización de la consulta sea peticionada por la comunidad, grupos o personas interesadas, se deben observar los requisitos y parámetros establecidos en esta ley para el ejercicio del derecho de petición.

Artículo 102.- Modalidades. La consulta popular se podrá realizar en las siguientes modalidades:

- 1) Reuniones con participación directa;
- 2) Encuestas;
- 3) Otras que se consideren pertinentes.

Artículo 103.- Anuncio. El anuncio de la consulta debe ser realizado a través de los medios que garanticen la mayor cobertura y difusión.

Artículo 104.- Contenido de la consulta. El anuncio de la consulta debe especificar lo siguiente:

- 1) El objeto de la misma;
- 2) La modalidad a emplear;
- 3) Las comunidades, sectores, grupos o personas formalmente convocadas;
- 4) El lugar y fecha en que se va a realizar;
- 5) Cualquier otro dato que contribuya a edificar a los interesados.

Artículo 105.- Claridad de la consulta. La consulta popular será realizada estableciendo un procedimiento que garantice la ordenada y libre expresión y ofreciendo todas las

informaciones que permitan la edificación de los participantes, para una participación efectiva y productiva.

Párrafo.- La ausencia de uno de los sectores formalmente convocados no invalidará la realización de la consulta.

Artículo 106.- Opiniones y recomendaciones. Los asistentes a la consulta popular harán las recomendaciones que consideren al poder público, entidad u órgano que les convocara, respecto del tema objeto de su consideración.

Artículo 107.- Informe. El poder público, entidad u órgano correspondiente debe realizar un informe con las opiniones y propuestas emitidas por los participantes en la consulta.

Párrafo I.- Las decisiones resultantes de la consulta popular deben ser el referente principal para la decisión del poder público, entidad u órgano correspondiente en el diseño y ejecución de la política pública correspondiente.

Párrafo II.- El poder público, entidad u órgano correspondiente publicará a través de un medio masivo de información, el registro de participantes en la consulta, los temas abordados, así como toda la documentación, planteamientos y proyecciones, concluyendo con la decisión tomada tras considerar los planteamientos y conclusiones de las partes involucradas.

CAPÍTULO V DE LA OBSERVACIÓN ELECTORAL

Artículo 108.- Propósito. La observación electoral tiene el propósito de constatar la regularidad de los procesos de votación y los resultados anunciados por la autoridad electoral, contribuyendo a reforzar la confianza en los procesos electorales del país.

Artículo 109.- Naturaleza. La observación electoral no posee una naturaleza jurídica, por lo que sus efectos no repercuten jurídicamente sobre el proceso electoral y sus resultados. Ninguna persona o institución que actúe en calidad de observador puede suplantar, igualar o abrogarse atribuciones que constitucional y legalmente son de la competencia exclusiva de la Junta Central Electoral.

Artículo 110.- Principios. La observación electoral se rige por los principios de imparcialidad, neutralidad y no injerencia de los observadores.

Artículo 111.- Idoneidad. Son personas físicas o morales, nacionales o internacionales, idóneas para fungir como observadores de los procesos electorales, aquellas con una reconocida vocación apartidista o que estén vinculadas a los procesos electorales, al

fortalecimiento de la democracia, a la promoción de los derechos humanos y a la observación electoral.

Artículo 112.- Acreditación. Es facultad exclusiva de la Junta Central Electoral expedir la acreditación a los observadores, así como determinar el número de observadores. Dicha acreditación es precedida por la invitación de la autoridad electoral o a solicitud de parte interesada.

Artículo 113.- Observadores. La calidad de observadores la tienen aquellas personas o entidades que habiendo sido invitadas por la autoridad electoral o que, habiendo solicitado su participación, hayan obtenido la autorización y respectiva acreditación por parte de la Junta Central Electoral.

Párrafo.- No podrán ser observadores aquellas personas físicas o morales que no estén en pleno goce de sus derechos civiles y políticos o que no estén legalmente constituidas, o que se identifiquen como partidarias de alguna agrupación política.

Artículo 114.- Tipos de observadores. Los observadores electorales pueden ser nacionales o internacionales. Son observadores nacionales todos aquellos ciudadanos o personas morales dominicanos, radicados o no en el país. Son observadores internacionales aquellos ciudadanos que tienen una nacionalidad distinta a la dominicana.

Artículo 115.- Visitantes extranjeros. Ostentan la calidad de visitantes extranjeros a los comicios electorales todas aquellas personas de nacionalidad no dominicana invitados por los partidos o alianzas políticas, funcionarios gubernamentales de países extranjeros invitados por cualquiera de los poderes del Estado, instituciones autónomas o entidades académicas de nivel superior.

Párrafo.- Los visitantes extranjeros también deben formular la solicitud correspondiente a la Junta Central Electoral para participar a los fines de obtener la acreditación correspondiente.

Artículo 116.- Invitación para observación electoral. La Junta Central Electoral puede formular invitaciones a los fines de observación electoral a organismos electorales con los cuales haya suscrito algún acuerdo de cooperación o cualquier otra organización u organismo de carácter internacional que tenga relaciones oficiales con República Dominicana o la Junta Central Electoral.

Artículo 117.- Solicitud para observación electoral. Todo ciudadano o entidad nacional o extranjera que desee participar como observador o visitante extranjero en un proceso electoral, debe dirigir por escrito una solicitud a la Junta Central Electoral en la que

expresare su deseo y las razones de su solicitud, los nombres de las personas que fungirían como observadores, el plan de observación y sus fuentes de financiamiento.

Artículo 118.- Credencial de identificación. Es obligación de la Junta Central Electoral emitir las credenciales de identificación a los observadores nacionales e internacionales así como a los visitantes extranjeros que los acrediten como tales.

Párrafo.- La credencial de identificación debe contener los datos siguientes:

- 1) Nombre (s) y apellido (s) del observador;
- 2) Foto del portador;
- 3) Tipo de observador;
- 4) Institución u organismo al que pertenece o representa;
- 5) País;
- 6) Número de Cédula de Identidad y Electoral, pasaporte o tarjeta de turismo;
- 7) Firma del observador;
- 8) Firma autorizada de la Junta Central Electoral;
- 9) Sello de la Junta Central Electoral.

Artículo 119.- Derechos de los observadores e invitados. En el ejercicio de sus funciones, los observadores nacionales e internacionales y los visitantes extranjeros acreditados gozan de los siguientes derechos y prerrogativas:

- 1) Libertad de circulación en todo el territorio nacional;
- 2) Libertad de comunicación con todos los partidos políticos o alianzas de partidos;
- 3) Acceso a los colegios electorales para observar el desarrollo de las votaciones y los escrutinios;
- 4) Acceso a las informaciones que disponga la Junta central Electoral, que no sean confidenciales de la autoridad electoral;
- 5) Acceso a los boletines de resultados electorales emitidos por la Junta Central Electoral;
- 6) Informarse sobre las denuncias o quejas que someta cualquier ciudadano, entidad o partido político a las autoridades electorales;

7) Observar el ejercicio de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos y el comportamiento de los miembros de las mesas electorales, los partidos políticos y alianzas políticas y sus delegados;

8) Acceso al centro de información habilitado por la autoridad electoral.

Artículo 120.- Deberes de los observadores. Son deberes de las personas que fungen como observadores en los procesos electorales, los siguientes:

1) Respetar la Constitución de la República y las leyes, así como los reglamentos, instrucciones, normas y disposiciones emanadas de la Junta Central Electoral;

2) No hacer proselitismo o manifestaciones a favor o en contra de alguna agrupación política o candidato;

3) Abstenerse de actuar de forma incompatible con su condición de observador nacional o internacional o visitante extranjero, evitando ofender, difamar o calumniar a las instituciones, autoridades electorales, agrupaciones políticas o candidatos;

4) Presentar por escrito a la Junta Central Electoral cualquier anomalía o queja que reciban o detecten durante el proceso electoral;

5) No obstaculizar a las autoridades electorales en el ejercicio de sus funciones, ni realizar actos que directa o indirectamente constituyan interferencia en el proceso electoral;

6) No declarar el triunfo o derrota de candidato o partido político alguno, ni ofrecer o difundir resultados preliminares o definitivos, parciales o totales, ni proyecciones sobre las votaciones.

Párrafo.- La Junta Central Electoral puede revocar la acreditación de los observadores nacionales e internacionales y visitantes extranjeros que violen la Constitución, las leyes o las normas y disposiciones emanadas de este órgano.

CAPÍTULO VI DE LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS

Artículo 121.- Veedurías ciudadanas. Se instituyen las veedurías ciudadanas como un mecanismo democrático de control social que permite a los ciudadanos de manera organizada, ejercer vigilancia, de manera organizada, sobre la gestión pública administrativa y sus autoridades en la observancia de los principios de eficacia, transparencia, planificación, racionalización y continuidad.

Artículo 122.- Ejercicio. Las veedurías ciudadanas podrán ser ejercidas en todos los niveles del territorio nacional y todos los sectores de la administración pública, centralizados, descentralizados o autónomos, así como en aquellos ámbitos, aspectos y niveles en los que en forma total o parcial, se empleen los recursos públicos

Artículo 123.- Objetivos. Son objetivos de las veedurías los siguientes:

- 1) Fungir como un mecanismo de control contra prácticas de corrupción en la gestión pública;
- 2) Velar por los intereses de la comunidad, como beneficiarias de la gestión administrativa;
- 3) Velar por el cumplimiento de los principios que rigen la función pública;
- 4) Promover las relaciones horizontales entre los ciudadanos y la administración pública;
- 5) Promover un ejercicio público transparente, accesible y documentado;
- 6) Promocionar el liderazgo y la participación ciudadana;
- 7) Vigilar el cumplimiento de las políticas pública en curso.

Artículo 124.- Derechos. Son derechos de los veedores:

- 1) Conocer de las políticas, planes y programas de las administraciones públicas;
- 2) Solicitar y obtener las informaciones correspondientes de acuerdo a lo solicitado;
- 3) Solicitar la adopción de medidas correctivas en caso de que encuentren irregularidades en el objeto de su vigilancia.

Artículo 125.- Facultad de Conformación. Todos los ciudadanos podrán constituir veedurías ciudadanas, sin que medie ningún tipo de obstáculo para ello, más que las formalidades que requiera esta ley.

Artículo 126.- Restricciones. No podrán ser veedores aquellas personas que tengan algún tipo de intervención en el programa o plan objeto de la veeduría, o estén vinculados directamente a los ejecutores del mismo.

Artículo 127.- Procedimiento de formación de las veedurías. Para la formación de veedurías, los ciudadanos designan a las personas que van a fungir como representantes de la veeduría, debiendo elaborar un documento en la que consten sus nombres, números de cédulas de identidad y electoral, objeto de la vigilancia y lugar de domicilio elegido,

debiendo depositar dicho documento ante el organismo sobre el cual se va a ejercer la veeduría.

Artículo 128.- Funciones. Las veedurías ciudadanas tienen las siguientes funciones:

- 1) Vigilar el cumplimiento de los programas de políticas públicas;
- 2) Recibir y canalizar las observaciones y sugerencias que presenten los ciudadanos respecto del objeto de vigilancia de la Veeduría;
- 3) Comunicar a la ciudadanía sobre los procesos de control y vigilancia que estén desarrollando;
- 4) Remitir a las autoridades sobre las que ejercen la veeduría los informes que ellas generen;
- 5) Vigilar que las acciones y recomendaciones producto de las veedurías sean tomadas en cuenta;
- 6) Denunciar las irregularidades que detecten.

Artículo 129.-Denuncia de irregularidades.- En caso de encontrarse irregularidades, los veedores pueden accionar mediante las vías correspondientes y denunciar ante las autoridades las anomalías encontradas.

CAPÍTULO VII DE LAS COMISIONES DE AUDITORÍA SOCIAL

Artículo 130.- Comisiones de auditoría social. Se instituyen las comisiones de auditoría social como un mecanismo de control social propio de la comunidad, con el objeto de defender y vigilar el gasto social que realiza el gobierno central o el gobierno local a través de la construcción de obras públicas, de forma que las mismas se realicen de acuerdo a lo planeado y presupuestado.

Párrafo.- La labor en las comisiones de auditoría social es voluntaria y no remunerada y apegada a valores éticos y morales.

Artículo 131.- Autonomía. Las comisiones de auditoría social gozarán de plena autonomía e independencia frente a todas las entidades públicas.

Artículo 132.- Formación y composición. En cada localidad donde se realicen obras públicas, podrá formarse una comisión de auditoría social, compuesta por un mínimo de cinco integrantes de reconocida solvencia moral, seleccionados por la comunidad en

asamblea convocada de común acuerdo por organizaciones comunitarias, religiosas, deportivas, de desarrollo y sociales en general.

Párrafo.- En caso de que las obras se realicen en un espacio geográfico que abarque varias comunidades o sectores, podrá formarse más de una comisión de autoría social, debiendo estas trabajar de manera coordinada.

Artículo 133.- Restricciones. No podrán formar parte de las comisiones de auditoría social los servidores públicos que trabajen en la institución que está a cargo de la construcción de que se trate, los empleados de la empresa constructora o personas electas para posiciones públicas.

Artículo 134.- Registro. Las comisiones de auditoría social que se formen deben ser registradas por ante la Cámara de Cuentas y comunicada su formación a la entidad encargada de la realización de la obra, informando los nombres de los comisionados, copia de sus cédulas de identidad y electoral, la obra objeto de vigilancia, lugar elegido como domicilio de la Comisión, y cualquier otro dato que se considere relevante.

Artículo 135.- Integrantes. Cada comisión de auditoría social tendrá un coordinador, un secretario y auditores comunitarios, dependiendo de las necesidades puntuales de cada obra y deben hacerse asesorar por instituciones, profesionales y/o técnicos calificados que podrían formar parte de la comisión.

Artículos 136.- Funciones. Son funciones de las comisiones de auditoría social las siguientes:

- 1) Contribuir con las distintas instituciones estatales encargadas de dar seguimiento a la correcta inversión de los fondos públicos en la ejecución de obras;
- 2) Inspeccionar las obras verificando la calidad de la construcción y registrar las observaciones de lugar documentando todo lo que se considere pertinente;
- 3) Procurar la colaboración con los contratistas de la obra, en beneficio de la labor que realizan, la comunidad y el país;
- 4) Comunicar a la oficina estatal que otorgó la obra o que la realiza, al Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa, a la fiscalía correspondiente y a cualquier otra instancia que estime considere pertinente, sobre las irregularidades técnicas o de administración que detecte en sus trabajos de supervisión;

5) Canalizar las informaciones o denuncias que obtengan y que reciban por parte de la comunidad ante las autoridades correspondientes a los fines que se corrijan las fallas verificadas;

6) Elaborar un informe final al término de la obra y previo recibimiento formal por parte del Estado, contentivo de toda la documentación generada en el transcurso de la misma dando cuenta a la comunidad y las entidades gubernamentales correspondientes del resultado de sus trabajos de supervisión y vigilancia;

7) Informar a la comunidad y a la sociedad en general de los resultados de su trabajo.

Artículo 137.- Compromisos. Los integrantes de las comisiones deben comprometerse a trabajar en pos de los intereses comunitarios, haciendo un uso correcto y eficiente de las informaciones obtenidas en el ejercicio de sus funciones, cuidando de que las mismas no sean manipuladas para el perjuicio de personas físicas o morales, públicas o privadas.

Artículo 138.- Información. Las comisiones de auditoría social tienen derecho a requerir y recibir toda la información relacionada con la obra, tales como: Planos, programas de ejecución, presupuestos y otros que las comisiones entiendan de lugar, debiendo serles entregadas sin costo alguno.

Párrafo I.- Las informaciones a que se refiere este artículo se solicitan por escrito al constructor designado o a la institución responsable de la construcción, especificando la obra a que se refiere, los datos y documentos requeridos y las firmas del coordinador y el secretario de la comisión.

Párrafo II.- La entidad a la cual haya sido requerida la información tiene un plazo de diez (10) días hábiles para dar respuesta a la solicitud correspondiente.

Párrafo III.- En caso de obstrucción o dificultad para el desarrollo de sus funciones, o la no entrega en los plazos fijados en el párrafo I de este artículo de las informaciones requeridas, las comisiones podrán ejercer las vías recursivas establecidas en la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública No. 200-04.

Artículo 139. Reporte. Las comisiones de auditoría social deben reportar el informe final de su actuación a la entidad encargada de la realización de la obra y a la Cámara de Cuentas.

Artículo 140.- Seguimiento. Las instancias gubernamentales que reciban los informes de las Comisiones de Auditoría Social están obligadas a darles seguimiento, para la verificación de los resultados y los fines de lugar.

CAPÍTULO VIII DE LOS OBSERVATORIOS

Artículo 141.- Observatorios. Se establecen y reconocen los observatorios como un medio de monitoreo de fenómenos sociales, políticos y económicos que tienen incidencia en la calidad de vida de la población y en las instituciones públicas, con el objetivo de relatar, explicar, predecir consecuencias y proponer soluciones sobre dichos fenómenos, que le permita contar con fuentes de información primaria, veraz y de calidad para tomar decisiones acertadas, dirigidas a proteger a la población a través del diseño y la aplicación de políticas sostenibles y perdurables.

Artículo 142.- Naturaleza de observatorios. Los observatorios podrán ser de carácter civil o estatal.

Artículo 143.- Observatorios ciudadanos. Son observatorios ciudadanos aquellos que surgen de la iniciativa de la sociedad civil o de ciudadanos, con el propósito de hacer una lectura y una observación profunda y cuidadosa de uno o varios fenómenos que afectan a una comunidad o el accionar de entes y órganos públicos en las ejecutorias de políticas públicas.

Artículo 144.- Competencias de los observatorios ciudadanos. Son competencias de los observatorios ciudadanos:

- 1) Vigilar el accionar y comportamiento de entes y órganos estatales, cuyas ejecutorias se consideren de interés público y social;
- 2) Obtener toda la información posible, pertinente y necesaria que sirva para evaluar las ejecutorias del ente o órgano público, plan o proyecto, buscando mejorar las condiciones generales del sector en el cual tienen interés;
- 3) Elaborar y proponer planes y estrategias tendentes a incidir de manera positiva en el fenómeno objeto del observatorio y en las ejecutorias de políticas públicas;
- 4) Monitorear, evaluar y fiscalizar las iniciativas, programas, proyectos, políticas públicas y sus resultados, así como cualquier otro aspecto de incidencia relacionado con el objeto y propósito del observatorio;
- 5) Elaborar un diagnóstico de la realidad en la cual desean incidir compuesto por metas e indicadores cuantitativos y cualitativos que sirvan como medidores de esa realidad con base estadística;
- 6) Realizar estudios generales sobre cualquier aspecto relacionado con el fenómeno;

- 7) Promover políticas públicas generales o particulares en beneficio del buen funcionamiento de los entes y órganos públicos y de la ciudadanía;
- 8) Promover la participación ciudadana en los observatorios de que se trate;
- 9) Medir y analizar el impacto de las políticas públicas relacionadas con la realidad observada;
- 10) Cualquier otra actividad que contribuya con sus objetivos.

Artículo 145.- Consejo o Comité coordinador. Los observatorios ciudadanos tendrán un consejo o comité coordinador integrado por personas interesadas, representantes de las organizaciones de la sociedad civil y académicas interesadas en el tema específico del observatorio.

Párrafo.- Los consejos o comités coordinadores podrán crear comisiones o grupos de trabajo, para realizar labores determinadas en áreas o temas, o para llevar a cabo acciones específicas relacionadas con el observatorio.

Artículo 146.- Delimitación campo de acción. El consejo o comité coordinador debe delimitar el campo de acción del observatorio, establecer sus objetivos general y específicos, planear los trabajos, asignar funciones específicas a los miembros, disponer las políticas y protocolos para el manejo de la información que se procesa y todas aquellas otras medidas necesarias para el buen funcionamiento y éxito del observatorio.

Artículo 147.- Observatorios estatales. Son observatorios estatales aquellos creados dentro de poderes del Estado, entes y órganos, así como instituciones descentralizadas y autónomas estatales, con el propósito de contribuir al buen funcionamiento de la administración gubernamental, a partir de la observación de la optimización de la función pública, las ejecutorias presupuestarias, las inversiones, el gasto social, la equidad de género y la aplicación de políticas de desarrollo institucional.

Artículo 148.- Creación de los observatorios estatales. La creación, funcionamiento, objetivos y atribuciones de los observatorios estatales se establece mediante decreto o resolución, según el ente u órgano centralizado, descentralizado o autónomo de que se trate.

Artículo 149.- Información. Todos los observatorios, ciudadanos y estatales, deben procurar la disponibilidad de sus informaciones por cualquier medio de información, incluyendo la creación de páginas web oficiales.

Artículo 150.- Diálogo. En los observatorios ciudadanos o estatales, es necesario el ejercicio de un proceso de diálogo y retroalimentación con uno y otro sector, a los fines de alcanzar mejores niveles en la actuación pública y la práctica de una ciudadanía responsable.

Artículo 151.- Restricción. Los observatorios no son entes ejecutores de políticas públicas, sólo pueden monitorearlas, evaluarlas y dar sugerencias en base a las informaciones y datos que obtienen.

CAPÍTULO IX DE LA DEMANDA EN RENDICIÓN DE CUENTAS

Artículo 152.- Demanda en rendición de cuentas. Sin perjuicio del mandato constitucional referente a la rendición de cuentas de funcionarios públicos, todo ciudadano o entidad social tiene el derecho de demandar a cualquier autoridad pública que rinda cuentas respecto a la ejecución presupuestal y el uso de los recursos del Estado puestos a su cargo, así como respecto al ejercicio sus atribuciones.

Artículo 153.- Sujetos. Pueden ser sujetos de la demanda en rendición de cuentas todos funcionarios estatales de los poderes y órganos constitucionales, las entidades gubernamentales, centralizadas, descentralizadas y autónomas, así como cualquier entidad que maneje fondos públicos.

Artículo 154.- Objetivos. La demanda en rendición de cuentas tiene los siguientes objetivos:

- 1) Garantizar el derecho de los ciudadanos a conocer de las gestiones realizadas por los funcionarios públicos;
- 2) Facilitar el ejercicio del derecho de control social y la fiscalización sobre los fondos del Estado;
- 3) Vigilar el cumplimiento en la ejecución de las políticas públicas;
- 4) Prevenir prácticas de corrupción en la administración pública;
- 5) Promover mejores prácticas en la administración pública.

Artículo 155.- Plazo. Una vez realizada la demanda de rendición de cuentas, el funcionario demandado cuenta con un plazo máximo de quince (15) días hábiles para responder la solicitud, lo cual debe hacer de manera precisa, contestando las interrogantes planteadas, pudiendo publicar la rendición en el portal de la institución correspondiente.

Artículo 156.- Denuncia. Si del informe rendido por el funcionario demandado se presume la comisión de algún delito o irregularidad administrativa, se hace del conocimiento de las autoridades administrativas competentes, así como de la Procuraduría General de la República, para que proceda según lo establecido en las leyes.

Artículo 157.- Solicitud rectificación de informe. Si el informe rendido por el funcionario demandado no reúne las condiciones y requisitos de demanda o si el peticionario lo encontrare insuficiente, éste podrá solicitar la rectificación del informe, debiendo el funcionario responder en un nuevo plazo de diez (10) días hábiles a partir de la recepción de rectificación.

CAPÍTULO X DE LA DENUNCIA DE FALTAS

Artículo 158.- Denuncia. Se reconoce el derecho de los ciudadanos y organizaciones sociales a denunciar las faltas cometidas por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, por ante los superiores jerárquicos del funcionario en cuestión.

Artículo 159.- Presentación. La denuncia debe hacerse siempre por escrito por ante el departamento de servicios o atención al usuario o dependencia admitida a estos efectos por la institución o despacho de la autoridad inmediatamente superior al funcionario contra el cual se ejerce la denuncia.

Artículo 160.- Contenido. La denuncia debe contener como mínimo las siguientes informaciones:

- 1) Nombre y apellidos del o los denunciantes con su número de cédula de identidad y electoral;
- 2) Funcionario o Institución contra la que se ejerce la denuncia;
- 3) Lugar o medio para las notificaciones de lugar;
- 4) Detalle claro y pormenorizado del objeto de la denuncia;
- 5) Fundamento constitucional, legal o reglamentario que avale la denuncia;
- 6) Relación de documentos y soportes justificativos que acompañan la denuncia, si los hubiere;
- 7) Firmas del o los denunciantes.

Artículo 161.- Investigación. La autoridad competente debe investigar las denuncias recibidas, y cuenta con un plazo de hasta quince (15) días hábiles para concluir la

investigación, al término del cual deberá rendir un informe que pondrá en conocimiento del denunciante y el denunciado.

Artículo 162.- Sanción. En caso de que se determine que el denunciado no haya incurrido en falta alguna, la denuncia se descartará y no podrá ser tomada en cuenta.

Párrafo.- En caso de comprobarse la comisión de falta, se seguirá el procedimiento correspondiente al régimen disciplinario establecido en la Ley 41-08 sobre Función Pública, o el que disponga esta ley u otras leyes especiales según sea el caso, sin perjuicio de cualquier otra acción procedente.

TITULO III

DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN Y CONTROL LOCAL

Artículo 163.- Reconocimiento de derechos de participación local. Se reconocen y garantizan los derechos de participación local como medios de viabilizar el desarrollo y fomentar la democracia en el ámbito municipal, como parte básica del Estado en donde se desarrollan de manera focalizada las relaciones culturales, sociales, políticas y económicas.

Artículo 164.- Mecanismos de participación local. El referendo y plebiscito local, cabildo abierto, presupuestos participativos e iniciativas normativas municipales, como mecanismos de participación local, se rigen por las disposiciones de la Ley 176-07, del 17 de julio del 2007, del Distrito Nacional y los Municipios.

TITULO IV

DEL DEFENSOR DEL PUEBLO

Artículo 165.- Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo es el ente encargado de la promoción e incentivo del ejercicio de los derechos de participación ciudadana y del impulso de los mecanismos de control social, así como órgano de consulta para el análisis, propuesta, evaluación, consenso y seguimiento de programas, estrategias, acciones y políticas relacionadas a la participación ciudadana y el control social.

Artículo 166- Misión. El Defensor del Pueblo, en cuanto a los derechos de participación ciudadana y mecanismos de control social, tiene como misión fundamental:

1) Propiciar un cauce institucional eficaz que propicie la participación plural y el consenso a favor del desarrollo integral de la sociedad;

- 2) Promover la participación activa, voluntaria, organizada, responsable y corresponsable de la ciudadanía en la elaboración, ejecución, supervisión y evaluación de los planes y actividades de la administración pública;
- 3) Establecer una relación equilibrada entre ciudadanos y autoridades que garantice una auténtica y directa representatividad ciudadana;
- 4) Proteger los derechos de los ciudadanos.

Artículo 167.- Criterios. El Defensor del Pueblo procurará que los derechos de participación ciudadana y los mecanismos de control social formen parte de un proceso continuo de desarrollo democrático basado en los criterios de continuidad, progresividad y sostenibilidad, que permitan generar en la población confianza en los mecanismos de participación y expansión del concepto de participación hacia nuevas responsabilidades por parte de todos los actores sociales permitiendo que el mismo forme parte de la identidad democrática de los ciudadanos.

Artículo 168.- Atribuciones. Son atribuciones del Defensor del Pueblo, en el marco de esta ley, las siguientes:

- 1) Promover la participación ciudadana evaluadora y propositiva, estimulando la formación en la ciudadanía de valores como el compromiso cívico, la transparencia y la lucha contra la corrupción.
- 2) Vigilar la transparencia en la ejecución de los actos de selección de autoridades.
- 3) Presentar, promover e impulsar propuestas normativas y de planes, programas y acciones relacionadas con la participación ciudadana y el control social.
- 4) Velar por el respeto y cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente ley.
- 5) Promover y estimular las iniciativas de control social sobre el desempeño de las políticas públicas.
- 6) Apoyar y asesorar técnica y metodológicamente las iniciativas, organizaciones, instancias y espacios de participación ciudadana y control social.
- 7) Actuar como enlace entre el Estado y la ciudadanía dentro de los procesos que se generen de las participaciones ciudadanas e instar para que las solicitudes y quejas ciudadanas sean atendidas.

8) Promover la realización de talleres, seminarios y foros que permitan a la ciudadanía conocer sobre sus derechos de participación y los mecanismos de control social que están a su disposición, fortaleciendo la conciencia cívica.

9) Realizar acciones de monitoreo y seguimiento permanentes a los procesos de rendición de cuentas que, según mandato constitucional, deben realizar las autoridades públicas.

10) Viabilizar, conjuntamente con las organizaciones sociales y las autoridades correspondientes, las distintas instancias de participación consagradas en la presente ley.

11) Cualquier otra que se considere necesaria a los fines de promover y proteger los derechos de participación ciudadana y los mecanismos de control social.

Párrafo.- Esta evaluación formará parte integral de la rendición de cuentas del Defensor del Pueblo y tendrá como objetivo fundamental la creación de políticas para el fortalecimiento del ejercicio de los derechos de participación ciudadana recomendadas por el Defensor del Pueblo.

Artículo 170.- Acción vía el Defensor del Pueblo. Todo ciudadano o grupos de ciudadanos podrán solicitar asistencia al Defensor del Pueblo, para poner en práctica los mecanismos de participación social.

Párrafo.- En caso de que los derechos de participación sean violentados por funcionarios de la administración pública, y tal violación es denunciada al Defensor del Pueblo, este puede actuar en justicia contra estos últimos.

Artículo 171.- Coordinación. El Defensor del Pueblo coordina sus trabajos con los distintos organismos del Estado, los cuales deben cooperar de forma activa y efectiva con las políticas de participación dispuestas en la presente ley y las demás que pudieran establecerse.

TITULO V DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 172.- Promoción. Es obligación del Estado y todas sus instituciones cumplir con los siguientes mandatos:

1) Promover procesos de formación ciudadana y fomentar campañas de difusión que instruyan a la ciudadanía en el ejercicio de los derechos y mecanismos de participación de que son titulares para lograr una verdadera integración de los distintos sectores sociales en los asuntos del Estado.

2) Facilitar las condiciones más favorables para consolidar la participación ciudadana como proceso fundamental para alcanzar los fines esenciales de un Estado Social y Democrático de Derecho.

3) Desarrollar y apoyar programas, proyectos, talleres y cualesquiera otros medios para educar a la población respecto de sus derechos de participación, valiéndose de campañas informativas en medios de comunicación masiva, formación de redes de educación popular, entre otros, sin que los mismos sean utilizados para fines proselitistas, promoción partidaria o personal.

4) Desarrollar los mecanismos necesarios para poner en práctica la instrucción en la formación social y cívica, la enseñanza de los preceptos constitucionales, enfatizando en los derechos y las garantías fundamentales y de los valores patrios, así como los principios de convivencia pacífica en todas las instituciones de educación públicas y privadas.

5) Todas las instituciones del Estado deben reconocer y tomar las acciones de lugar adecuando sus condiciones para atender y garantizar los derechos y mecanismos de participación y control reconocidos constitucionalmente y plasmados en esta ley, así como difundir y poner en conocimiento de la colectividad de los medios con los que cuentan para su ejercicio.

6) Implementar, en todas sus funciones y niveles de gobierno, procesos de formación y capacitación de los servidores públicos en el ejercicio de los derechos de participación ciudadana para la promoción de una cultura basada en el ejercicio de derechos y obligaciones y la construcción de una gestión pública participativa.

Artículos 173.- Responsabilidad de los medios de comunicación. Los medios de comunicación deben facilitar espacios de su programación destinados para la formación ciudadana y la promoción de sus derechos, deberes y formas de participación.

Artículo 174.- Presupuesto. La Junta Central Electoral incluirá en su presupuesto anual, una partida que será utilizada exclusivamente para la realización de los procesos de participación cuando así sea requerido.

Artículo 175.- Recursos. Los ciudadanos cuentan con el derecho de ejercer todos los recursos y acciones que la Constitución y las leyes adjetivas y especiales establecen para la protección y salvaguarda de sus derechos.

Artículo 176.- Organización y certificación. Corresponde a la autoridad electoral la organización y certificación del cumplimiento de los requisitos exigidos para el

cumplimiento de los mecanismos de democracia directa establecidos por la Constitución y las leyes.

Artículo 177.- Responsabilidad de los ciudadanos. Los ciudadanos y sus organizaciones representativas, que en el ejercicio de sus derechos de participación y de los mecanismos de control social causen un perjuicio injustificado a la administración pública o sus representantes, o realicen algún acto contrario a las leyes, podrán comprometer su responsabilidad civil y penal.

Artículo 178.- Responsabilidad de entidades públicas y sus funcionarios. A los fines de aplicación de esta ley, las entidades públicas y sus funcionarios podrán comprometer conjunta y solidariamente su responsabilidad civil y/o penal por los daños y perjuicios que causaren por una actuación u omisión antijurídica.

Artículo 179.- Control estatal. Las disposiciones de esta ley serán ejecutadas sin perjuicio de las competencias de control, vigilancia y fiscalización que correspondan a la Cámara de Cuentas, a la Contraloría General de la República y al Congreso Nacional de la República sobre los bienes públicos.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primero.- Reglamento. El Poder Ejecutivo dictará el reglamento de aplicación de esta ley, dentro de los noventa (90) días después de su entrada en vigencia.

Segundo.- Manual de procedimiento. En un plazo de ciento ochenta (180) días a partir de la entrada en vigencia de esta ley, las cámaras legislativas elaborarán el Manual de Procedimiento Interno para el depósito, tratamiento y decisión de las iniciativas legislativas populares.

Tercero.- Reglamentación transitoria aplicable. Los reglamentos internos de las cámaras legislativas prevalecerán en el trámite interno de las ILP, hasta tanto se elabore el en las cámaras legislativas el Manual de Procedimiento para el depósito, tratamiento y decisión respecto a las iniciativas legislativa populares.

Cuarto.- Reglamentación Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral reglamentará todo lo concerniente al procedimiento interno de las Iniciativas Legislativas Populares, Referendo Aprobatorio Constitucional, Referendo Ordinario y Plebiscitos Nacionales.

DISPOSICIONES FINALES

Primero.- Derogación. Quedan derogados el Decreto No. 39-03, del 16 de enero del año 2003, que crea las Comisiones de Auditoría Social; el Reglamento para la Observación

Electoral, del 8 de enero del año 2010, dictado por la Junta Central Electoral; así como cualquier otra disposición que le sea contraria a esta ley.

Segundo.- Vigencia. Esta ley entra en vigencia después de su promulgación y publicación según la Constitución de la República y transcurridos los plazos fijados en el Código Civil Dominicano.

DADA.....

FÉLIX BAUTISTA
SENADOR PROVINCIA SAN JUAN